



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

AL2034-2023

Radicación n.º 97477

Acta 11

Barranquilla (Atlántico), veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Resuelve la Corte el conflicto de competencia que se suscitó entre el **JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN** y el **JUZGADO DOCE MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ**, dentro del proceso ejecutivo laboral que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** instauró contra el **INSTITUTO DE DOLOR DE CABEZA Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LTDA. - EN LIQUIDACIÓN.**

I. ANTECEDENTES

Ante los juzgados municipales de pequeñas causas laborales de Medellín, Porvenir S.A. inició proceso ejecutivo

laboral contra el instituto citado en precedencia, con el propósito de obtener el cobro de los aportes pensionales que dicha sociedad dejó de sufragar en calidad de empleadora.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, autoridad judicial que mediante auto de 03 de octubre de 2022 declaró su falta de competencia por considerar que, conforme al artículo 110 del CPTSS, Porvenir tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, y *«el título ejecutivo no consigna el lugar de su expedición (fl. 9). Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y que del título ejecutivo no se puede determinar su lugar de expedición, el factor de competencia se determina por el domicilio de la parte activa, el cual se encuentra en Bogotá, en este caso el fuero electivo al no colocarse la ciudad donde se expide el título, se limita solo al domicilio de la AFP, que corresponde a Bogotá D.C., además, que del título ejecutivo no se observa que este haya sido expedido en la ciudad de Medellín, a efectos de determinar la competencia de este Despacho judicial»*.

Por ende, consideró que la competencia para conocer de este asunto correspondía al juez del domicilio principal de la entidad ejecutante, esto es, la ciudad de Bogotá, a donde remitió las diligencias.

El proceso fue asignado al Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el cual, a través de auto adiado el 02 de febrero de 2023, se declaró incompetente y propuso la colisión respectiva,

argumentando que, pese a la tesis esgrimida por la Corte respecto de la aplicación del artículo 110 del CPTSS para establecer la competencia por el factor territorial para este tipo de procesos, *«este Despacho estima que la competencia debe analizarse a la luz de lo consagrado en el artículo 5º del CPT y SS»*.

En consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo previsto en el numeral 4.º del artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 10.º de la Ley 712 de 2001, en armonía con el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7.º de la Ley 1285 de 2009, corresponde a la Corte dirimir el conflicto de competencia que se presente entre juzgados de diferente distrito judicial.

En el *sub lite* la colisión radica en que ambos juzgados consideran no ser los competentes para dirimir el asunto, pues mientras el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, aduce que el competente es el juez del lugar del domicilio de la ejecutante, esto es, el de Bogotá, teniendo en cuenta la omisión de la promotora de señalar el lugar en el cual fue expedido el título ejecutivo; el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá arguye que la competencia está dada por las reglas del artículo 5.º del CPTSS, es decir, el último lugar donde se

haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante.

Para efectos de elucidar el asunto objeto del debate, conviene recordar que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, señala que *«Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador [...]»*, y aunque la ley no indica una norma clara y precisa de la cual derivar la competencia para conocer de las actuaciones ejecutivas de que trata el precepto atrás citado, esto es, cuando el cobro lo adelantan las administradoras del Régimen de Ahorro Individual, lo cierto es que por virtud de lo dispuesto en el art. 145 del CPTSS, en relación con la aplicación analógica y el principio de integración de las normas adjetivas, la solución al tema encuentra abrigo en lo dispuesto por el art. 110 de la misma normativa.

Dispone el mentado precepto que *«De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946, conocerán los jueces laborales del circuito del domicilio [...]»* del ISS o la seccional que hubiere proferido la resolución correspondiente *«[...] y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón o cuantía»*.

Así lo ha venido sosteniendo la Corte, entre otros, en la providencia CSJ AL228-2021, en la cual asentó:

Sin embargo, aunque la legislación laboral no reguló con precisión la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 para las

administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo cierto es que el artículo 110 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social determina la competencia del juez laboral para conocer en asuntos de igual naturaleza, pero en relación al Instituto de Seguros Sociales, dentro del régimen de prima media con prestación definida.

Razón por la que en virtud del principio de integración normativa de las normas procedimentales es dable acudir a lo dispuesto en el artículo 110 *ibidem* que refiere que el funcionario competente para conocer de la ejecuciones promovidas por el ISS, con el objeto de lograr el pago de las cuotas o cotizaciones que se le adeuden, es el juez del lugar del domicilio de dicho ente de seguridad social o de la seccional en donde se hubiere proferido la resolución, título ejecutivo, por medio de la cual declara la obligación de pago de las cotizaciones adeudadas.

Para el caso, fluye del expediente que el título ejecutivo no expresa el lugar en el cual fue expedido, y el domicilio principal de la ejecutante es la ciudad de Bogotá, pero la demanda fue presentada en la ciudad de Medellín, según lo señala el libelo genitor, teniendo en cuenta *«la naturaleza del asunto, la cuantía y la vecindad de las partes»*.

Como ya se dijo, la regla decantada por esta Sala como pertinente para determinar la competencia por el factor territorial en este tipo de asuntos está contenida en el art. 110 del CPTSS, preceptiva que prevé las siguientes alternativas: *i)* el *«domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales»*, entendido así por analogía como el domicilio de la AFP; o *ii)* el lugar de *«[...] la caja seccional del mismo (Instituto Colombiano de Seguros Sociales) que hubiere proferido la resolución correspondiente [...]»*, esto es, con el mismo derrotero como aquel en el cual se expidió el título ejecutivo, *«[...] de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón o cuantía»*, a elección de la ejecutante.

Teniendo en cuenta que no fluye del expediente con certeza el lugar en el cual el título ejecutivo fue librado, resulta así necesario acudir a la primera de las opciones anteriormente señaladas, esto es, la del domicilio principal de la AFP Porvenir, que lo es la ciudad de Bogotá.

En ese orden, la autoridad judicial competente para conocer del presente asunto es el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, a donde, por consiguiente, se remitirán las presentes diligencias para que se continúe el trámite respectivo, sin perjuicio de que se adopten las medidas pertinentes en virtud de la situación de liquidación en que se encuentra la ejecutada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto que se suscitó entre el **JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN** y el **JUZGADO DOCE MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ**, dentro del proceso ejecutivo laboral que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** instauró contra el **INSTITUTO DE DOLOR DE CABEZA Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LTDA. – EN LIQUIDACIÓN**, en el sentido

de remitir el expediente al último de los mentados despachos judiciales, sin perjuicio de que se adopten las medidas pertinentes en virtud de la situación de liquidación en que se encuentra la ejecutada.

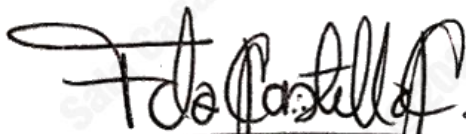
SEGUNDO: INFORMAR lo resuelto al **JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN**. Oficiese.

Notifíquese y cúmplase.



GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala



FERNANDO CASTILLO CADENA




LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ



OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR



MARJORIE ZUÑIGA ROMERO



Secretaría Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

En la fecha **22 DE AGOSTO DE 2023**, a las 8:00 a.m., se notifica por anotación en estado n.º **131** la providencia proferida el **29 DE MARZO DE 2023**

SECRETARIA _____



Secretaría Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia
CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En la fecha **25 DE AGOSTO DE 2023** y hora 5:00 p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida el **29 DE MARZO DE 2023**

SECRETARIA _____